

Señor

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA VALLE (Reparto).

E. S. D.

DEMANDANTE: MANUEL JOSÉ PLAZA

DEMANDADO: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA -

REFERENCIA: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA.

JORGE IVÁN MENDOZA, mayor y vecino de Tuluá Valle, identificado con cédula de ciudadanía número 2.631.782 expedida en San Pedro Valle, abogado acreditado con la T.P. 169.314 del C. S. J., obrando en calidad de apoderado judicial del señor **MANUEL JOSÉ PLAZA**, mayor y vecino de Guacarí Valle, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.325.265 expedida en Guacarí, respetuosamente me dirijo al Señor **JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA VALLE** en ejercicio de la ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para presentar la demanda con la que ha de darse inicio a un proceso ordinario en contra de **LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** en el que se profiera sentencia estimatoria de las pretensiones que en el respectivo acápite se indican.

1. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES.

- 1.1 **Demandante:** El señor MANUEL JOSÉ PLAZA, mayor y vecino de Guacarí Valle, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.325.265 expedida en Guacarí Valle, representado por el suscrito togado JORGE IVÁN MENDOZA, mayor y vecino de Tuluá Valle, identificado con la cédula de ciudadanía



U. Central del Valle del Cauca
Jorge Iván Mendoza
Abogado T.P. 169.314 C.S.J.

número 2.631.782 expedida en San Pedro Valle y acreditado con la tarjeta profesional número 169.314 del Consejo Superior de la Judicatura.

- 1.2 **Demandada:** La NACIÓN – RAMA JUDICIAL– CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - representada judicialmente por el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

2. PRETENSIONES.

- 2.1 Se **DECLARE** administrativa y patrimonialmente responsable a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - de los daños y perjuicios antijurídicos que le fueron causados al señor MANUEL JOSÉ PLAZA con ocasión de la falla en la prestación del servicio de administración de justicia que tuvo ocurrencia en el trámite del proceso ordinario laboral que promovió en contra del municipio de San Juan Bautista de Guacarí.
- 2.2 Como consecuencia de la anterior declaración y a título de indemnización de perjuicios se **CONDENE** a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - a pagar al señor MANUEL JOSÉ PLAZA la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$88.932.800,00 M/CTE.) por concepto de los perjuicios materiales que le fueron ocasionados por la falla en la prestación del servicio de administración de justicia acaecida en el trámite del proceso ordinario laboral que promovió en contra del municipio de San Juan Bautista de Guacarí.
- 2.3 Las sumas de dinero a cuyo pago se condene a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – se ajustarán en su valor de conformidad con lo ordenado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



U. Central del Valle del Cauca
Jorge Iván Mendoza
Abogado T.P. 169.314 C.S.J.

2.4 Se **CONDENE** a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - a pagar al señor MANUEL JOSÉ PLAZA la suma que corresponda por concepto de costas y agencias en derecho causadas en este proceso.

2.5 Se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. **HECHOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LAS PRETENSIONES.**

3.1 Obrando por intermedio de apoderado judicial el día 22 de abril de 2009 el señor Manuel José Plaza presentó demanda en contra del municipio de San Juan Bautista de Guacarí en procura de obtener en forma coercitiva el pago de los derechos laborales que en su favor se causaron por la prestación personal de sus servicios a ese municipio en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de julio de 2008 durante el cual se desempeñó como operador de motoniveladora.

3.2 El 27 de abril de 2009 el Juez Primero Laboral del Circuito de Buga profirió el Auto Interlocutorio No. 870 por medio del cual resolvió admitir la demanda presentada por el señor Manuel José Plaza en contra del municipio de San Juan Bautista de Guacarí.

3.3 El Auto admisorio de la demanda le fue notificado personalmente al señor Alcalde del municipio de San Juan Bautista de Guacarí el día 30 de junio de 2009.

3.4 El 15 de julio de 2009 por intermedio de apoderado judicial el municipio de San Juan Bautista de Guacarí contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y argumentando que el señor Manuel José Plaza prestó sus servicios personales al municipio de Guacarí mediante un contrato administrativo de prestación de servicios “ops” (sic) regido por la ley 80 de 1993.



U. Central del Valle del Cauca
Jorge Iván Mendoza
Abogado T.P. 169.314 C.S.J.

- 3.5 El municipio de San Juan Bautista de Guacarí no allegó al proceso como prueba documental ningún contrato administrativo de prestación de servicios regido por la ley 80 de 1993 celebrado con el señor Manuel José Plaza para la prestación de sus servicios como operador de motoniveladora.
- 3.6 La parte actora solicitó en la demanda que se decretara y valorara como prueba documental la constancia expedida por el **Secretario de Obras Públicas** del municipio de Guacarí el 6 de mayo de 2008 en la que se hizo constar que el señor Manuel José Plaza se desempeñaba como operador de motoniveladora en el municipio de Guacarí desde el 1º de enero de 2004 y hasta la fecha de su expedición.
- 3.7 En el acápite de pruebas de la contestación a la demanda, el apoderado judicial del municipio de San Juan Bautista de Guacarí, expuso:

“SOBRE LAS PRUBAS DE LA PARTE DEMANDANTE.

Aceptamos las pruebas aportadas con la demanda para que sean decretadas y valoradas como elementos integrantes del acervo probatorio. Excepto la documental “5.2 certificación ...” por falta de certeza de la originalidad y la ratificación de la misma. Desde ahora tachamos de falsa dicha certificación.

PRUEBAS SOLICITADAS.

*Nos adherimos a las pruebas aportadas con la demanda **excepto la certificación obrante a folio 5 número 5.2.**” (Se resalta y se subraya).*

- 3.8 El 22 de septiembre de 2009 el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga profirió el Auto Interlocutorio No. 178 por medio del cual resolvió declarar contestada la demanda en forma extemporánea.
- 3.9 El apoderado judicial del municipio de San Juan Bautista de Guacarí interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra del Auto Interlocutorio

No. 178 del 22 de septiembre de 2009 proferido por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga por medio del cual resolvió declarar contestada la demanda en forma extemporánea.

- 3.10 El 4 de noviembre de 2009 el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga Valle profirió el Auto Interlocutorio No. 2463 por medio del cual resolvió no reponer para revocar el Auto Interlocutorio No. 178 del 22 de septiembre de 2009, pero concedió el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria.
- 3.11 El 14 de enero de 2010 el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga profirió el Auto Interlocutorio No. 0030 por medio del cual resolvió declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del Auto Interlocutorio No. 178 del 22 de septiembre de 2009 porque el recurrente no hizo el pago de las expensas necesarias para expedir las copias que debía remitirse al superior.
- 3.12 El 15 de marzo de 2010 se realizó la audiencia de conciliación judicial a la cual no asistió el Alcalde del municipio de San Juan Bautista de Guacarí, razón por la cual el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga consideró que no le asistía ánimo conciliatorio y resolvió tener como indicio grave la inasistencia del representante legal del ente territorial demandado a la audiencia de conciliación.
- 3.13 En la audiencia de conciliación judicial el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga profirió el Auto Interlocutorio No. 698 por medio del cual resolvió tener en cuenta el Auto No. 178 del 22 de septiembre de 2009 en el que había resuelto que la contestación de la demanda se presentó en forma extemporánea, y ordenó continuar con el trámite de ley.
- 3.14 El 16 de julio de 2010 el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga profirió la Sentencia No. 093 por medio de la cual absolvió al municipio de San



U. Central del Valle del Cauca
Jorge Iván Mendoza
Abogado T.P. 169.314 C.S.J.

Juan Bautista de Guacarí de todos y cada uno de los cargos que dieron origen (sic) al juicio iniciado por el señor Manuel José Plaza.

- 3.15 El Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga Valle absolvió al municipio de San Juan Bautista de Guacarí argumentando que **el actor no probó en el proceso que prestó el servicio bajo la subordinación respecto de la entidad demandada, ni desvirtuó la existencia del contrato administrativo de prestación de servicios**; pues en la parte motiva de la Sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010 expuso:

“Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, como quiera que en el presente caso, no se demostró mediante prueba alguna por la parte actora, que el demandante señor MANUEL JOSE PLAZA, hubiera desempeñado sus labores bajo la subordinación del ente territorial, para así desvirtuar el supuesto contrato de prestación de servicios que rigió entre las partes y demostrar que efectivamente tal vínculo había sido un contrato laboral y no de prestación de servicios, en el que se conjugaban los elementos regidores del mismo, como son la prestación personal del servicio, continuada dependencia o subordinación y la remuneración, necesariamente se ha de absolver al MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ, de las condenas aquí solicitadas...” (Se subraya).

- 3.16 En el trámite de la primera instancia el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga precisó que el señor Manuel José Plaza ostentaba la calidad jurídica de **trabajador oficial**, pues además de que admitió y le dio trámite a la demanda, en la parte motiva de la sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010 expuso:

“Sea lo primero, determinar si el aquí demandante es trabajador oficial o empleado público.

Al respecto el Código de Régimen Municipal Decreto Ley 1333/86, determina en su artículo 292 que en los municipios son trabajadores oficiales quienes se dediquen a la construcción o sostenimiento de obras públicas.



U. Central del Valle del Cauca
Jorge Iván Mendoza
Abogado T.P. 169.314 C.S.J.

El diccionario de la Real Academia de la lengua española define la “construcción” como la realización y ejecución, creación, edificación o reconstrucción de una obra.

El Dr. Pedro A. Lamprea, en su libro “Practica Administrativa” Tomo I, realiza un estudio detallado del concepto de construcción y mantenimiento de obra pública resumiéndose así:

(...).

Así las cosas, desde el punto de vista funcional, el cargo desempeñado por el demandante como operario de motoniveladora, corresponde al de un trabajador oficial, no obstante en el entendido, que las labores por él desarrolladas correspondían a actividades de mantenimiento y sostenimiento de obras públicas, independientemente del tipo de vinculación que le ungió con el ente traído a juicio, pues el mismo desempeñó labores de operario de motoniveladora en beneficio de la Administración Municipal de Guacarí, **a más de ello, tal aspecto no fue discutido por la entidad traída a juicio. (...)**
*(Resaltado y subrayado fuera del texto de la providencia).

3.17 La parte actora interpuso recurso de apelación contra de la sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010 proferida por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga, el cual se fundamentó en las siguientes razones:

Primera: En que el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga valoró la argumentación expuesta, más no probada, por el apoderado judicial del municipio de Guacarí en la contestación de la demanda, según la cual, el señor Manuel José Plaza prestó sus servicios personales al municipio de Guacarí mediante un contrato administrativo de prestación de servicios regido por la ley 80 de 1993, muy a pesar de que mediante Auto Interlocutorio No. 178 del 22 de septiembre de 2009 resolvió que el municipio de Guacarí había contestado la demanda en forma extemporánea, lo cual confirmó en el Auto No. 698 del 15 de marzo de 2010.



Segunda: En que en el expediente no obraba como prueba documental ningún contrato administrativo de prestación de servicios regido por la ley 80 de 1.993 suscrito por las partes y el cual debiera ser desvirtuado por el demandante para demostrar que su vínculo jurídico con el municipio de Guacarí fue de naturaleza laboral y no de prestación de servicios.

Tercera: En que el señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga invirtió la carga de la prueba al exigir al señor Manuel José Plaza que debía probar en el proceso la subordinación a la cual estuvo sometido por parte del municipio de Guacarí, desconociendo de plano que la subordinación se presume legalmente en toda relación de trabajo y que era entonces el municipio de Guacarí el que debí asumir la carga procesal de desvirtuar la presunción legal de la subordinación si pretendía negar la existencia de la relación laboral.

3.18 El recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010 proferida por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga fue tramitado ante la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, y aunque confirmó la sentencia apelada con fundamento en un asunto que no fue objeto del recurso, le dio la razón a la parte actora respecto de los motivos en los que fundó la apelación, pues en la parte motiva de la sentencia No. 041 del 25 de julio de 2012 expuso:

“III. CONSIDERACIONES

*Para resolver el primer problema jurídico planteado ”i) **Si al haberse tenido por contestada en forma extemporánea la demanda por parte del ente demandado, el a quo podía considerar los argumentos defensivos para sustentar su fallo**”: Se debe tener en cuenta la misma génesis procesal, **y en esto le asiste razón al apelante**, pues claramente se observa a folio 87 – vuelto- que se dio por contestada en forma extemporánea la demanda mediante decisión de septiembre 22 de 2009, situación que junto con el Auto de noviembre 4 de 2009 que no repone el anterior y concede la alzada, para luego declarar desierto el recurso mediante proveído de enero 14 de 2010; y finalmente en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del*



litigio efectuado el 15 de marzo de 2010, en la cual no se tuvo en cuenta la contestación de la demanda por haberse decretado su extemporaneidad y en tal virtud no se decretó ninguna prueba a favor de la entidad pasiva del proceso.

*Lo anterior evidencia con claridad meridiana que al operador judicial le era vedado tener como pruebas o argumentos a favor del ente demandado los de la contestación de la demanda, pues los mismos carecían de valor probatorio para las partes, a no ser que de oficio el mismo operador hubiese decretado mediante su poder oficioso las pruebas aportadas en la contestación de la demanda o cualquiera otra que hubiese considerado importante para resolver el litigio traído a su conocimiento. **Por tanto se equivocó el a quo al considerar los argumentos de la contestación de demanda y estudiar la existencia de supuestos contratos de prestación de servicios de los cuales no existe –probatoriamente hablando- dentro del proceso referencia que pueda tenerse en cuenta para proferir decisión de fondo.** *(Resaltado y subrayado fuera del texto de la providencia).*

- 3.19 La calidad jurídica de **trabajador oficial** que ostentaba el señor Manuel José Plaza no fue objeto del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010 proferida por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga.
- 3.20 La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga planteó como segundo problema jurídico a resolver: **ii) Si el demandante desvirtuó la presunción legal que determina a todos los servidores municipales como empleados públicos;** sin que este asunto fuera objeto del recurso de apelación.
- 3.21 La Sala Cuarta de Decisión Laboral de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga resolvió confirmar la sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010 proferida por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga fundando su decisión en que el señor Manuel José Plaza ostentaba la calidad jurídica de **empleado público** y que no podía en consecuencia acceder a la jurisdicción laboral (sic)



en procura de que se dirimiera el conflicto con el municipio de Guacarí, pues en la parte motiva de la Sentencia No. 041 del 25 de julio de 2012, expuso:

“(…)

Para poder desvirtuar esta presunción que establece la Ley, como en el caso presente, debió demostrar que se encontraba en uno de los casos que le ameritaran la condición de trabajador oficial, es decir que se dedicada a la construcción y sostenimiento de obras públicas, o en su defecto que prestaba sus servicios a una empresa industrial y comercial del Estado, situación que en ningún momento se demostró probatoriamente por la parte actora (...)

Por tanto resuelto el problema jurídico planteado, se tiene que el actor no desvirtuó la presunción legal que determina la calidad de empleado público que tiene todo servidor municipal, y por tanto no allegó ningún medio probatorio idóneo que demostrara la calidad de trabajador oficial para que pudiera acceder a la jurisdicción laboral, a dirimir su conflicto con el municipio citado.”

3.22 No tuvo en cuenta la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga que la calidad jurídica de **trabajador oficial** con la que el señor Manuel José Plaza actuó en el proceso ordinario laboral que propuso contra del municipio de Guacarí no fue objeto del recurso de apelación porque en el trámite de la primera instancia el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga precisó que el señor Manuel José Plaza ostentaba la calidad jurídica de **trabajador oficial**, pues a más de que admitió la demanda y le dio trámite al proceso, en la parte motiva de la Sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010 expuso:

“Sea lo primero, determinar si el aquí demandante es trabajador oficial o empleado público.

Al respecto el Código de Régimen Municipal Decreto Ley 1333/86, determina en su artículo 292 que en los municipios son trabajadores oficiales quienes se dediquen a la construcción o sostenimiento de obras públicas.



U. Central del Valle del Cauca
Jorge Iván Mendoza
Abogado T.P. 169.314 C.S.J.

El diccionario de la Real Academia de la lengua española define la “construcción” como la realización y ejecución, creación, edificación o reconstrucción de una obra.

El Dr. Pedro A. Lamprea, en su libro “Práctica Administrativa” Tomo I, realiza un estudio detallado del concepto de construcción y mantenimiento de obra pública resumiéndose así: (...).

*Así las cosas, debe desde el punto de vista funcional, el cargo desempeñado por el demandante como operario de motoniveladora, corresponde al de un trabajador oficial, no obstante en el entendido, que las labores por él desarrolladas correspondían a actividades de mantenimiento y sostenimiento de obras públicas, independientemente del tipo de vinculación que le ungió con el ente traído a juicio, pues el mismo desempeñó labora de operario de motoniveladora en beneficio de la Administración Municipal de Guacarí, a más de ello, tal aspecto no fue discutido por la entidad traída a juicio.” *(Resaltado y subrayado fuera del texto de la providencia).*

3.23 La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga no declaró oficiosamente la nulidad por falta de jurisdicción a pesar de que consideró que el actor no podía acceder a la jurisdicción laboral (sic) para que dirimiera el conflicto porque ostentaba la calidad jurídica de empleado público y no de trabajador oficial.

4. TÍTULO DE IMPUTACIÓN:

ERROR JURISDICCIONAL.

El título de imputación es el error jurisdiccional en el que se incurrió en el trámite del proceso ordinario laboral que el señor Manuel José Plaza promovió contra del municipio de San Juan Bautista de Guacarí en procura de obtener el reconocimiento y pago de los derechos laborales que en su favor se causaron por la prestación personal de sus servicios como operario de motoniveladora durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2004 y el 31 de julio de 2008.

5. AUTORIDAD INVESTIDA DE FACULTAD JURISDICCIONAL QUE COMETIÓ EL ERROR QUE SE IMPUTA.

- 5.1 El Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga Valle.
- 5.2 La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga Valle.

6. PROVIDENCIAS EN LAS CUALES SE MATERIALIZÓ EL ERROR JURISDICCIONAL QUE SE IMPUTA

- 6.1 En la Sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010 proferido por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga en el trámite de la primera instancia del proceso ordinario laboral que el señor Manuel José Plaza promovió contra el municipio de San Juan Bautista de Guacarí.
- 6.2 En la Sentencia No. 041 del 25 de julio de 2012 proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga Valle en el trámite de la segunda instancia del proceso ordinario laboral que el señor Manuel José Plaza promovió contra del municipio de San Juan Bautista de Guacarí.

7. ERROR DE DERECHO EN EL QUE INCURRIÓ EL SEÑOR JUEZ PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUGA.

En el trámite de la primera instancia el Señor Juez Primero Laboral de Circuito de Buga incurrió en error de derecho porque violó el normado legal que seguidamente se indica:

- 7.1 El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil que consagra la necesidad de la prueba y ordena que: Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.

Concepto de la violación.

La decisión de absolver al municipio de Guacarí de la pretensiones presentadas en la demanda no está fundada en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, pues no obraba en el expediente como medio de prueba documental ningún contrato administrativo de prestación de servicios regido por la ley 80 de 1993 que fuera suscrito por las partes, pero aun así el Señor Juez Primero Laboral de Circuito de Buga absolvió al municipio de San Juan Bautista de Guacarí de las pretensiones presentadas en la demanda argumentando que el actor prestó sus servicios personales a municipio mediante un contrato administrativo de prestación de servicios regido por la ley 80 de 1993.

Para resolver el asunto puesto en su conocimiento el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga acogió el argumento expuesto por el apoderado judicial de la parte demandada en la contestación de la demanda; actuación procesal que carece de fundamento de derecho tal y como lo expuso la Sala Cuarto de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga en la parte motiva de la Sentencia No. 041 del 25 de julio de 2012 en la que de manera clara precisa y expresa le dio la razón a la parte actora al exponer en la parte motiva:

*“Para resolver el primer problema jurídico planteado ”i) **Si al haberse tenido por contestada en forma extemporánea la demanda por parte del ente demandado, el a quo podía considerar los argumentos defensivos para sustentar su fallo**”: Se debe tener en cuenta la misma génesis procesal, y en esto le asiste razón al apelante, pues claramente se observa a folio 87 – vuelto- que se dio por contestada en forma extemporánea la demanda mediante decisión de septiembre 22 de 2009, situación que junto con el Auto de noviembre 4 de 2009 que no repone el anterior y concede la alzada, para luego declarar desierto el recurso mediante proveído de enero 14 de 2010; y finalmente en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio efectuado el 15 de marzo de 2010, en la cual no se tuvo en cuenta la contestación de la demanda por haberse decretado su*



extemporaneidad y en tal virtud no se decretó ninguna prueba a favor de la entidad pasiva del proceso.

*Lo anterior evidencia con claridad meridiana que al operador judicial le era vedado tener como pruebas o argumentos a favor del ente demandado los de la contestación de la demanda, pues los mismos carecían de valor probatorio para las partes, a no ser que de oficio el mismo operador hubiese decretado mediante su poder oficioso las pruebas aportadas en la contestación de la demanda o cualquiera otra que hubiese considerado importante para resolver el litigio traído a su conocimiento. Por tanto se equivocó el a quo al considerar los argumentos de la contestación de demanda y estudiar la existencia de supuestos contratos de prestación de servicios de los cuales no existe –probatoriamente hablando- dentro del proceso referencia que pueda tenerse en cuenta para proferir decisión de fondo. *(Resaltado y subrayado fuera del texto de la providencia).*

- 7.2 El artículo 32 de la ley 80 de 1993 que ordena que los contratos administrativos deben constar por escrito.

Concepto de la violación.

Sin que obrara en el expediente como prueba documental ningún contrato administrativo de prestación de servicios suscrito por las partes, el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga absolvió al municipio de Guacarí de la pretensiones presentada en la demanda, argumentando que el señor Manuel José Plaza prestó sus servicios personales al municipio mediante un contrato administrativo de prestación de servicios, desconociendo de plano que el artículo 32 de la ley 80 de 1993 ordena de manera clara precisa y expresa que los contratos administrativos deben constar por escrito; es decir, que su existencia no se presumen ni de hecho, ni derecho.

- 7.3 El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil que consagra la carga de la prueba y ordena que: Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Concepto de la violación.

Desconoció de plano el Señor Juez Primero Laboral de Circuito de Buga que era el municipio de San Juan Bautista de Guacarí el que debía probar que el señor Manuel José Plaza prestó sus servicios personales mediante un contrato administrativo de prestación de servicios regido por la ley 80 de 1993 si pretendía que se lo exonerara de la obligación legal de pagar al actor los derechos laborales demandados, y sin razón de derecho alguna, invirtió la carga de la prueba y exigió al señor Manuel José Plaza que debía desvirtuar el contrato administrativo, probando en el proceso que prestó sus servicios personales al municipio de Guacarí bajo continuada subordinación y dependencia; lo cual además de carecer de fundamento de derecho, es ilógico, pues como en el proceso no estaba probada la existencia del contrato administrativo de prestación de servicios regido por la ley 80 de 1993, era entonces imposible que la parte actora desvirtuara su existencia, por la sencilla razón de que no es jurídica ni materialmente posible desvirtuar la existencia de algo que no está probado que existe.

- 7.4 El artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por la ley 50 de 1990 artículo 2° que consagra la presunción legal de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.

Concepto de la violación.

Violando de manera flagrante el normado legal indicado, el señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga exigió al señor Manuel José Plaza que probara en el proceso que prestó sus servicios personales al municipio de Guacarí bajo continuada subordinación y dependencia para desvirtuar el contrato administrativo de prestación de servicios.

La actuación procesal del Señor Juez en este punto es contraria a derecho, pues además de que en el proceso no se probó la existencia de ningún contrato

administrativo de prestación de servicios regido por la ley 80 de 1993 suscrito por las partes, exigió al señor Manuel José Plaza que probara en el proceso que prestó sus servicios personales al municipio de Guacarí de Guacarí bajo continuada subordinación y dependencia para desvirtuar el supuesto contrato, en lugar de exigir al municipio de Guacarí que probara en el proceso que el señor Manuel José Plaza prestó sus servicios personales mediante un contrato administrativo de prestación de servicios si pretendía negar la existencia de una relación de trabajo y que se lo exonerara de la obligación legal de pagar las prestaciones sociales y los demás derechos laborales que en su favor se causaron por la prestación personal de sus servicios, desconociendo de plano que la subordinación se presume legalmente en toda relación de trabajo por disposición expresa del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por la ley 50 de 1990 artículo 2º.

8. ERROR DE DERECHO EN EL QUE INCURRIÓ LA SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA.

- 8.1 La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga violó el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, adicionado por el artículo 35 de la ley 712 de 2001 que consagra el principio de la congruencia y ordena que la sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación.

Concepto de la violación.

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga planteó como segundo problema jurídico que debía resolver: **“ii) Si el demandante desvirtuó la presunción legal que determina a todos los servidores municipales como empleados públicos”**; asunto éste que como no fue objeto del recurso de apelación, no podía ser abordado por la Sala en el trámite de la segunda instancia.

No debió la Sala adentrarse a plantear como segundo problema jurídico que debía resolver, un asunto que no fue objeto del recurso de apelación, para con fundamento en ese asunto confirmar la sentencia apelada; pues, por disposición expresa del normado procesal indicado, el Superior sólo tiene competencia para examinar y pronunciarse sobre aquellos aspectos que fueron objeto del recurso de apelación, al ordenar que la sentencia de segunda instancia debe estar en consonancia con las materias objeto del recurso.

- 8.2 La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga violó el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil que consagra la necesidad de la prueba y ordena que: Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.

Concepto de la violación.

El normado legal indicado fue violado porque la Sala resolvió confirmar la Sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010 proferida por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga, argumentado que el señor Manuel José Plaza ostentaba la calidad jurídica de **empelado público**, lo cual no estaba probado en el proceso; ni fue objeto del recurso de apelación.

Contrario sensu, estaba plenamente probado en el proceso que el señor Manuel José Plaza ostentaba la calidad jurídica de **trabajador oficial**, pues obraba en el expediente como medio de prueba documental la constancia expedida el 6 de mayo de 2008 por el **Secretario de Obras Públicas** del municipio de Guacarí en la que dio fe de que el señor Manuel José Plaza se desempeñaba como operador de motoniveladora en el municipio de desde el 1º de enero de 2004 y hasta la fecha de expedición e la citada certificación.

Respecto de la constancia expedida por el **Secretario de Obras Públicas** del municipio de Guacarí el 6 de mayo de 2008 en la que dio fe de que el señor Manuel José Plaza se desempeñaba como operador de motoniveladora en el



U. Central del Valle del Cauca
Jorge Iván Mendoza
Abogado T.P. 169.314 C.S.J.

municipio desde el 1° de enero de 2004 y hasta la fecha de su expedición, la parte demandada expuso en la contestación de la demanda.

“SOBRE LAS PRUBAS DE LA PARTE DEMANDANTE.

*Aceptamos las pruebas aportadas con la demanda para que sean decretadas y valoradas como elementos integrantes del acervo probatorio. **Excepto la documental “5.2 certificación ...” por falta de certeza de la originalidad y la ratificación de la misma. Desde ahora tachamos de falsa dicha certificación.***

PRUEBAS SOLICITADAS.

*Nos adherimos a las pruebas aportadas con la demanda **excepto la certificación obrante a folio 5 número 5.2.**” *(Se resalta y se subraya).*

Ahora, como mediante Auto Interlocutorio No. 178 del 22 d septiembre de 2009 el señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga resolvió declarar contestada la demanda en forma extemporánea y la citada providencia se encontraba en firme porque el Señor Juez declaró desierto el recurso de apelación impetrado en su contra porque el recurrente no hizo el pago de las expensas necesarias para la expedición de las copias que debía remitirse al Superior, al no prosperar la tacha de falsedad presentada por la parte demandada contra la citada prueba documental, fuerza concluir entonces, como lo hizo el A quo, en la Sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010, que:

“...Así las cosas, debe desde el punto de vista funcional, el cargo desempeñado por el demandante como operario de motoniveladora, corresponde al de un trabajador oficial, no obstante en el entendido, que las labores por él desarrolladas correspondían a actividades de mantenimiento y sostenimiento de obras públicas, independientemente del tipo de vinculación que le ungió con el ente traído a juicio, pues el mismo desempeñó labores de operario de motonivelador en beneficio de la Administración Municipal de Guacarí, a más de ello, tal aspecto no fue discutido por la entidad traída a juicio. (...)”.



- 8.3 La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga violó el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, artículo 1º numeral 175, que consagra la competencia del superior, y ordena que: La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (...).

Concepto de la violación.

Desconoció de plano la Sala que la calidad jurídica de **trabajador oficial** con la que el señor Manuel José Plaza actuó en el proceso no fue objeto del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010 proferida por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga de Buga, y que en consecuencia carecía de competencia para enmendar la sentencia apelada en ese punto.

Desconoció además la Sala que el presupuesto procesal de la competencia por ramas –jurisdicción-, a más de que no fue objeto del recurso de apelación, ya había sido revisado por el Juez de primera instancia, quien además de admitir la demanda y darle al proceso el trámite legal, en la parte motiva de la Sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010, expuso:

“Sea lo primero, determinar si el aquí demandante es trabajador oficial o empleado público.

Al respecto el Código de Régimen Municipal Decreto Ley 1333/86, determina en su artículo 292 que en los municipios son trabajadores oficiales quienes se dediquen a la construcción o sostenimiento de obras públicas.



U. Central del Valle del Cauca
Jorge Iván Mendoza
Abogado T.P. 169.314 C.S.J.

El diccionario de la Real Academia de la lengua española define la “construcción” como la realización y ejecución, creación, edificación o reconstrucción de una obra.

El Dr. Pedro A. Lamprea, en su libro “Práctica Administrativa” Tomo I, realiza un estudio detallado del concepto de construcción y mantenimiento de obra pública resumiéndose así: (...).

Así las cosas, debe desde el punto de vista funcional, el cargo desempeñado por el demandante como operario de motoniveladora, corresponde al de un trabajador oficial, no obstante en el entendido, que las labores por él desarrolladas correspondían a actividades de mantenimiento y sostenimiento de obras públicas, independientemente del tipo de vinculación que le ungió con el ente traído a juicio, pues el mismo desempeñó labora de operario de motoniveladora en beneficio de la Administración Municipal de Guacarí, a más de ello, tal aspecto no fue discutido por la entidad traída a juicio (...) *(Resaltado y subrayado fuera del texto de la providencia).

- 8.4 La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga violó el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989 artículo 1º, numeral 85, que consagra la declaración oficiosa de nulidad y ordena que: En cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe. (...).

Concepto de la violación.

El error de derecho en el que incurrió la Sala consistió en que a pesar de que consideró que el litigio suscitado entre el señor Manuel José Plaza y el municipio de Guacarí no podía tramitarse ante la jurisdicción laboral (sic) porque consideró que el actor ostentaba la calidad jurídica de empleado público; en lugar de darle aplicación al artículo 145 del Código de Procedimiento Civil modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, artículo 1º numeral 85, y declarar oficiosamente la nulidad de lo actuado en el proceso desde el Auto Admisorio de la demanda y remitir el expediente a la

jurisdicción contencioso administrativa para que conociera del litigio, profirió la Sentencia No. 041 del 25 de julio de 2012 por medio de la cual resolvió confirmar la sentencia apelada.

La Actuación procesal de a Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga además de carecer de fundamento de derecho, es totalmente ilógica; pues, si llegó a la conclusión que carecía de competencia para conocer del proceso porque el señor Manuel José Plaza ostentaba la calidad jurídica de empleado público, no debió proferir la Sentencia No. 041 del 25 de julio de 2012 mediante la cual confirmó la sentencia apelada, sino, que debió proceder como lo ordena el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, y debió declarar oficiosamente la nulidad por falta de jurisdicción y remitir el expediente a la jurisdicción contencioso administrativa para que ante esa jurisdicción se tramitara el proceso.

Así las cosas, la Sentencia No. 041 del 25 de julio de 2012 proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga mediante la cual confirmó la sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010 proferida por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga es contraria a la ley, pues si la Sala consideró que carecía de competencia para conocer del proceso ordinario laboral promovido por el señor Manuel José Plaza contra el municipio de Guacarí porque según su criterio el señor Manuel José Plaza ostentaba la calidad jurídica de empleado público y no de trabajador oficial, debió proceder entonces conforme lo ordena el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil y declarar oficiosamente la nulidad por falta de jurisdicción consagrada en el numeral 1 del artículo 140 ibídem, la cual es insaneable por ordenarse así en el inciso 2° del numeral 6 del artículo 144 del citado Código, y remitir el expediente a la jurisdicción contencioso administrativa para que dirimiera el conflicto, en lugar de proferir sentencia mediante la cual resolviera confirmar la sentencia proferida por el A quo.

9. EL HECHO DAÑOSO.

El hecho dañoso es la violación del Derecho Constitucional Fundamental al Debido Proceso y consecuentemente la violación del Derecho Constitucional Fundamental al Trabajo.

10. EL DAÑO.

Debido a la violación del Derecho Constitucional Fundamental al Debido Proceso, al señor Manuel José Plaza no le fue posible obtener por la vía judicial el reconocimiento y pago de los derechos laborales que en su favor se causaron por la prestación personal de sus servicios al municipio de Guacarí como operario de motoniveladora durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de julio de 2008.

11. NEXO CAUSAL ENTRE EL HECHO DAÑOSO Y EL DAÑO CAUSADO.

El nexo causal entre el hecho dañoso y el daño antijurídico ocasionado al señor Manuel José Plaza, es evidente por las siguientes razones:

Primera: si el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga no hubiese incurrido en el error jurisdiccional de encontrar probado, sin estarlo en el proceso, que el señor Manuel José Plaza prestó sus servicios personales al municipio de Guacarí mediante un contrato administrativo de prestación de servicios regido por la ley 80 de 1993, habría tenido que condenar entonces al municipio de Guacarí a pagar al señor Manuel José Plaza los derechos laborales que en su favor se causaron por la prestación personal de sus servicios como operario de motoniveladora durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de julio de 2008, porque el municipio de Guacarí no desvirtuó la relación laboral que existió entre las partes, para poder liberarse así de la obligación legal de pagar al actor las prestaciones sociales y demás derechos laborales.



Segunda: Si el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga no hubiese incurrido en el error jurisdiccional de invertir la carga de la prueba y exigir al señor Manuel José Plaza que debía probar en el proceso que prestó sus servicios personales al municipio de Guacarí bajo la continuada subordinación y dependencia, la cual legalmente se presume, necesariamente habría tenido que condenar al municipio de Guacarí a pagar al actor las prestaciones sociales y demás derechos laborales que en su favor se causaron por la prestación personal de sus servicios como operario de motoniveladora durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de julio de 2008, porque en el proceso se encontraba plenamente probada la concurrencia de los tres (3) elementos esenciales del contrato de trabajo que rigió la relación laboral que existió entre las partes.

Tercera: Si el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga no hubiese incurrido en el error jurisdiccional de invertir la carga de la prueba, y exigido al señor Manuel José Plaza que debía allegar al proceso la prueba para desvirtuar la existencia de un supuesto contrato administrativo de prestación de servicios regido por la ley 80 de 1993, el cual no obraba en el expediente, habría tenido que condenar entonces al municipio de Guacarí a pagar al actor las prestaciones sociales y demás derechos laborales que en su favor se causaron por la prestación personal de sus servicios como operario de motoniveladora durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de julio de 2008, porque el municipio de Guacarí no probó en el proceso que el señor Manuel José Plaza prestó sus servicios personales mediante un contrato administrativo de prestación de servicios regido por la ley 80 de 1993 y que en consecuencia no tenía derecho al reconocimiento y pago de prestaciones sociales.

Cuarta: Si la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga no hubiese incurrido en el error jurisdiccional de encontrar probado, sin estarlo en el proceso, que el señor Manuel José Plaza ostentaba la calidad jurídica de empleado público, necesariamente habría tenido que



revocar la Sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010 proferida por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga, y en su lugar habría condenado al municipio de Guacarí a pagar al señor Manuel José Plaza las prestaciones sociales y los demás derechos laborales que en su favor se causaron por la prestación personal de sus servicios al municipio como operario de motoniveladora durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de julio de 2008, toda vez que la Sala resolvió confirmar la sentencia apelada, no porque la parte actora careciera de razón en cuanto a los motivos en los que fundó el recurso de apelación, pues afirmó que le asistía razón al apelante en cuanto a las razones en las que fundó el recurso; sino, porque consideró, sin estar probado en el proceso, que el señor Manuel José Plaza no podía acudir a la jurisdicción laboral (sic) para que se le resolviera el litigio con el municipio de Guacarí porque tenía la calidad de empleado público.

Quinta: Si la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga no hubiese incurrido en el error jurisdiccional de desbordar la competencia que la limitaba para enmendar la sentencia apelada única y exclusivamente en la parte que fue objeto del recurso de apelación necesariamente habría tendido que revocar la sentencia apelada y haber resuelto en su lugar condenar al municipio de Guacarí a pagar al señor Manuel José Plaza las prestaciones sociales y los demás derechos laborales que en su favor se causaron por la prestación personal de sus servicios al municipio como operario de motoniveladora durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de julio de 2008, porque de no haberse adentrado a revisar y a pronunciarse respecto de la calidad jurídica con la que el señor Manuel José Plaza actuó en el proceso, no habría llegado a la errada conclusión de que se debía confirmar la sentencia apelada porque el actor no podía acceder a la jurisdicción laboral (sic) para que dirimiera el conflicto con el municipio de Guacarí porque tenía la calidad jurídica de empleado público y no de trabajador oficial.

Sexta: Si la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga no hubiese incurrido en el error jurisdiccional de abstenerse de declarar oficiosamente la nulidad por falta de jurisdicción y remitir el expediente a la jurisdicción contencioso administrativo para que ante ella se tramitara el proceso, no se le habría causado al señor Manuel José Plaza el daño indicado, pues una vez resuelto el conflicto de competencia suscitado, el proceso habría terminado con una sentencia proferida, ya fuera por la jurisdicción ordinaria, o por la jurisdicción contencioso administrativa, pero en todo caso, con estricta sujeción al normado Constitucional y legal que consagra del debido proceso.

12. JURAMENTO ESTIMATORIO DE LOS PERJUICIOS.

Bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la suscripción de la presente demanda, manifiesto a su Señoría que los perjuicios que le fueron ocasionados al señor Manuel José Plaza los estimo razonadamente en la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$88.932.800,00 M/CTE.), calculados de la siguiente forma:

Prima de Servicio	2.768.333,00
Prima de Navidad	3.070.508,00
Vacaciones	1.384.167,00
Prima de Vacaciones	1.486.931,00
Cesantías	3.312.578,00
Sanción moratoria ley 50 /1990	25.086.133,00
Sanción ley 244 / 1995	28.911.467,00
Intereses de cesantía	397.509,00
Sanción moratoria intereses	397.509,00
Auxilio de Transporte	3.000.067,00
Auxilio de alimentación	2.141.729,00
Dotación	2.718.000,00
Costas y agencias en derecho	<u>14.257.869,00</u>
	\$
Total	88.932.800,00

13. PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS.

Con el fin de probar los hechos indicados en el respectivo acápite del libelo demandatorio, respetuosamente me permito solicitar a su Señoría decrete y valore como elementos integrantes del acervo probatorio en el trámite de este proceso los siguientes medios de prueba documental que anexo:

- 13.1 Copia de la demanda presentada por el señor Manuel José Plaza contra el municipio de San Juan Bautista de Guacarí.
- 13.2 Copia del Auto Interlocutorio No. 870 del 27 de abril de 2009 proferido por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga.
- 13.3 Copia del Acta de notificación personal que del Auto Interlocutorio No. 870 del 27 de abril de 2009 se hizo al señor Alcalde del municipio Guacarí.
- 13.4 Copia de la contestación de la demanda por parte del municipio de San Juan Bautista de Guacarí.
- 13.5 Copia de la constancia expedida el 6 de mayo de 2008 por el Secretario de Obras Públicas del municipio de San Juan Bautista de Guacarí.
- 13.6 Copia del Auto Interlocutorio No. 178 del 22 de septiembre de 2009 proferido por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga.
- 13.7 Copia del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada contra el Auto Interlocutorio No. 178 del 22 de septiembre de 2009 proferido por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga.
- 13.8 Copia del Auto Interlocutorio No. 2463 del 4 de noviembre de 2009 proferido por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga.

- 13.9 Copia del Auto Interlocutorio No. 0030 del 14 de enero de 2010 proferido por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga.
- 13.10 Copia del acta contentiva de la audiencia de conciliación judicial realizada el 15 de marzo de 2010.
- 13.11 Copia de la sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010 proferida por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga.
- 13.12 Copia del recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia No. 093 del 16 de julio de 2010 proferida por el Señor Juez Primero Laboral del Circuito de Buga.
- 13.13 Copia de la sentencia No 041 del 25 de julio 2012 proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

14. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA.

La cuantía de las pretensiones la estimo razonadamente en la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$88.932.800,00 M/CTE.) cuantificada de la siguiente forma:

Prima de Servicio	2.768.333,00
Prima de Navidad	3.070.508,00
Vacaciones	1.384.167,00
Prima de Vacaciones	1.486.931,00
Cesantías	3.312.578,00
Sanción moratoria ley 50 /1990	25.086.133,00
Sanción ley 244 / 1995	28.911.467,00
Intereses de cesantía	397.509,00
Sanción moratoria intereses	397.509,00
Auxilio de Transporte	3.000.067,00
Auxilio de alimentación	2.141.729,00

Dotación	2.718.000,00
Costas y agencias en derecho	<u>14.257.869,00</u>
Total	88.932.800,00

15. COMPETENCIA.

15.1 Competencia por razón de la cuantía.

De conformidad con lo ordenado en el artículo 155 numeral 6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la competencia para conocer de la presente demanda es del Señor Juez del Circuito Administrativo, en primera instancia, toda vez que la cuantía de las pretensiones no excede de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda.

15.2 Competencia en razón al factor territorial.

Como los hechos constitutivos del error jurisdiccional ocurrieron en el trámite de la primera y de la segunda instancia del proceso promovido por el señor Manuel José Plaza contra el municipio de Guacarí, las cuales se tramitaron ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga Valle, y ante la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga Valle, respectivamente, la competencia para conocer de este proceso es del Señor Juez Administrativo del Circuito de Buga Valle, de conformidad con lo ordenado en el numeral 6 del artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

16. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

16.1 Constitución Nacional, artículos: 1, 2, 4, 25, 29, 53, 90, 228, 229 y 230.



U. Central del Valle del Cauca
Jorge Iván Mendoza
Abogado T.P. 169.314 C.S.J.

16.2 Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, artículos: 65, 66, 67 y 69.

16.3 El artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, adicionado por la ley 712 de 2001, artículo 35.

16.4 El artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

16.5 Los artículos: 4, 6, 140, 144, 145 y 357 del Código de Procedimiento Civil.

16.6 Las demás normas que les sean concordantes y complementarias.

17. ANEXOS.

17.1 El poder especial que me fue conferido por el señor Manuel José Plaza.

17.2 La Constancia de realización de audiencia de conciliación extrajudicial.

17.3 Los documentos aducidos como elementos integrantes del acervo probatorio en el respectivo acápite.

17.4 Copia de la demanda y sus anexos para el traslado a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura -.

17.5 Copia de la demanda y sus anexos para el traslado al Ministerio Público.

17.6 Copia de la demanda y sus anexos para el traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

17.7 Copia de la demanda para el archivo del Despacho.

17.8 Copia de la demanda en medio magnético. Un (1) CD.



U. Central del Valle del Cauca
Jorge Iván Mendoza
Abogado T.P. 169.314 C.S.J.

18. NOTIFICACIONES.

- 18.1 Al suscrito togado se lo puede notificar en la carrera 14 No. 7-16, oficina 205 de Buga Valle; teléfono 312 296 85 65; e mail jivam2009@hotmail.com
- 18.2 Al señor Manuel José Plaza se lo puede notificar en la carrera 14 No. 7-16, oficina 205 de Buga Valle.
- 18.3 Al Director Ejecutivo de Administración Judicial se lo puede notificar en el Despacho ubicado en la calle 12. No. 7 - 75 de Bogotá D.C. Tel. 565 85 00; o por intermedio del Director(a) del Consejo Seccional de la Judicatura con sede en la carrera 4ª No. 12 - 04, edificio Nacional, piso 2, de la ciudad de Cali Valle.

Respetuosamente.

JORGE IVÁN MENDOZA
C. C. 2.631.782 de San Pedro Valle
T. P. 169.314 del C. S. J.